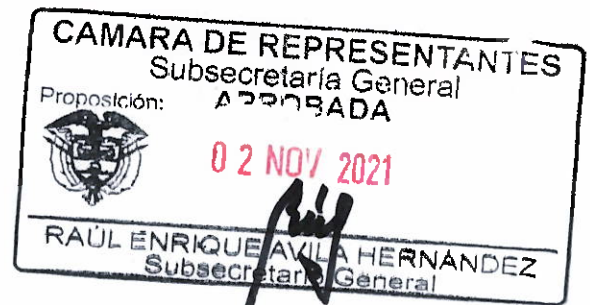


Bogotá D.C., 27 de octubre de 2021

Honorable Representante
Presidenta
Jennifer Kristin Arias Falla
Cámara de Representantes



PROPOSICIÓN

En nuestra condición de Congresistas de la República y en concordancia con lo establecido en el artículo 264, numeral 3, de la Ley 5 de 1992, solicito a la Plenaria de la Cámara de Representantes se apruebe la convocatoria a la Audiencia Pública para la participación ciudadana sobre los conflictos en el departamento de Antioquia entre el Estado, la gran minería nacional y multinacionales, con las comunidades de los municipios de Buriticá, Segovia, Remedios, Caucaasia, Nechí, El Bagre, Zaragoza, Jericó, Támesis, San Roque, entre otros.

JUSTIFICACIÓN

La política minera nacional ha impuesto en los territorios una serie de tensiones y conflictos entre, por un lado, el Estado y la gran minería nacional y multinacional, y, por el otro, las comunidades y los territorios. En el caso del departamento de Antioquia, esto se expresa en una serie de inconformidades que han derivado incluso en procesos de movilización social. En el Nordeste antioqueño, donde tiene presencia la Gran Colombia Gold, los pequeños mineros y los mineros ancestrales del territorio han sufrido persecución judicial, desplazamiento y estigmatización pública, lo cual ha limitado su posibilidad de trabajar. De igual manera sucede en el Bajo Cauca antioqueño, donde la situación ha derivado en la muerte de algunos mineros a manos de miembros de la Fuerza pública.

En el Suroeste de Antioquia, el conflicto ambiental y social se ha gestado entre la Anglo Gold Ashanti y las comunidades de influencia del proyecto Quebradona; y entre esta misma multinacional, con el proyecto Gramalote, y las comunidades de San Roque. En el Occidente antioqueño, la comunidad de la vereda Higabra, vecina del proyecto de la zijin Continental Gold, ha protestado buscando el cumplimiento de los acuerdos suscritos ante un conflicto de convivencia. Y en el Cañón del río Porce, la Unidad Nacional contra la Minería Ilegal y Antiterrorismo (Unimil) ha provocado persecución a los mineros y quema de elementos de pequeña minería.

Por lo anterior, se hace necesario establecer un diálogo entre las comunidades, las multinacionales y el Estado para encontrar rutas de solución que restituyan y garanticen los derechos de las poblaciones y la armonía en el territorio.

1h

Atentamente,



Jorge Alberto Gómez Gallego
Representante a la Cámara
Departamento de Antioquia

PARTIDO DIGNIDAD

Sírvase enviar la invitación para la Audiencia Pública en mención a las siguientes entidades y personas:

1. Agencia Nacional de Licencias Ambientales.
2. Agencia Nacional de Minería.
3. Policía Nacional-Unimil.
4. Ministerio de Minas y Energía.
5. Secretaría de Minas del departamento de Antioquia.
6. Contraloría y Procuraduría.
7. Alcaldes de los municipios de Segovia, Remedios, Támesis, Jericó, Buriticá, San Roque, Caucasia, Nechí, El Bagre, Yolombó y Cisneros.
8. Organizaciones sociales y comunidades del territorio.
9. Delegados de las multinacionales mineras.

N-071